



Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

\\nos Aires, 2 de agosto de 2024.

VISTOS, Expte. N.º 41081/2017 “CASAMA SA c/ AFIP s/PROCESO DE CONOCIMIENTO” y CONSIDERANDO:

I.- Que, mediante la sentencia del [6/5/2024](#), la Sra. jueza *a quo* decidió admitir la procedencia formal de la acción meramente declarativa de certeza, promovida por la actora en los términos del art. 322 del CPCCN, y desestimarla en cuanto pretendía que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad a su parte del art. 7, del Cap. III de la ley 27.346, y sus normas complementarias y la R.G. 4078/2017, que establecieron un impuesto extraordinario a las operaciones financieras especulativas (dólar futuro).

En lo que aquí importa, se destacó en la sentencia que, según la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la doble imposición no importa por si misma agravio constitucional (conf. C.S. “Fallos”: 249:657, 327:1729, entre otros), sino que debe analizarse si la imposición vulnera el principio de capacidad contributiva. En línea con ello, agregó que “[l]a lesión a este principio tributario no deriva del texto de la norma que crea el tributo, sino que debe comprender la situación individual del contribuyente, teniendo en cuenta el valor del bien gravado –utilidades obtenidas de los contratos dólar futuro-, y el monto resultante del gravamen” .

Sobre el punto, precisó que, el informe pericial adunado en autos —que sumando las alícuotas de los dos impuestos, el cuestionado en autos y el impuesto a las ganancias, llega al 50,94% de incidencia— no resulta suficiente para acreditar la confiscatoriedad del impuesto extraordinario aquí discutido sobre la renta del contribuyente.



Asimismo, la Magistrada de grado, descartó que el tributo alcance a los derechos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 27.346 (BO 27/12/2016).

Sobre el punto, señaló que, el hecho imponible que alcanza el gravamen, acaeció el 31 de diciembre de 2016, con posterioridad a la vigencia de la ley. Por último, entendió que la Resolución General N° 4078/17 no configura un exceso reglamentario dado que no altera ni el espíritu ni la letra de la ley. Ello, por cuanto si bien los contratos de futuro fueron celebrados en el 2015, su resultado (utilidades gravadas) se produjo en 2016.

Finalmente, distribuyó las costas por su orden y reguló los honorarios del perito contador que intervino en autos.

II.- Que, contra esa decisión interpusieron la parte actora y la demandada sendos recursos de apelación -ver escritos presentados el [08/5/2024](#) y [08/5/2024](#) respectivamente-. También el perito contador [apeló](#) la regulación de sus honorarios.

III.- Que, en su [memorial](#) se agravia la actora, en primer lugar, porque se desestimó el argumento relativo a la doble imposición derivada de la aplicación de la Ley 27.346. Ello, con base en que, según sostiene la recurrente, el *quid* de la cuestión en la presente acción de certeza no radica en develar la capacidad económica de su parte, sino en la injusta situación que se verifica cuando la misma capacidad contributiva se grava dos veces al pretender que el actor tribute dos veces un mismo hecho imponible.

Al respecto, resalta que, la sentenciante no ha reparado en la violación del derecho constitucional de propiedad producida por la doble imposición a todas luces demostrada en autos, en tanto implica pagar dos veces un mismo tributo en perjuicio del contribuyente, produciendo una injusta reducción de su patrimonio.

En segundo lugar, se queja porque, contrariamente a lo expuesto en la sentencia, la pericia contable presentada en autos confirma la confiscatoriedad alegada. En ese orden, destaca que, del informe presentado surge expresamente que la alícuota efectiva, derivada de la aplicación del Impuesto a las Ganancias y del





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

Impuesto Extraordinario a las Operaciones Especulativas “Dólar Futuro”, es del 50,94%.

Por ser ello así, afirma la recurrente que, la sentencia pasa por alto que la presión fiscal resultante de la aplicación de los tributos es muy superior al 33%, en virtud de ello el tributo resulta confiscatorio, pues supera ampliamente el porcentaje establecido por la CSJN, conforme surge acreditado mediante la certificación contable y la pericia contable presentada en autos.

Por otra parte, cuestiona como tercer agravio, lo resuelto en torno al planteo de retroactividad de la ley, pues sostiene que, la resolución realiza un análisis parcial y erróneo de los fundamentos expuestos al iniciar la presente acción.

Sobre ese aspecto de la sentencia, afirma que, “[e]l juez de grado equivocadamente considera que la aplicación del artículo 7 de la ley 27.346 no alcanzaría derechos adquiridos del contribuyente, pasando por alto que el hecho imponible se produjo con anterioridad a la fecha de sanción y publicación de la ley 27.346, ello toda vez que las ganancias se devengan en el proceso de compensación diaria característico de la operatoria de los contratos de dólar futuro. De ahí que pueda afirmarse que la obligación tributaria nació con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, alcanzando hechos ocurridos en el pasado, lo que lleva a calificarla como retroactiva. Que además la retroactividad configurada en el caso, adquiere la transcendencia de un principio constitucional en tanto priva a mi representada de ganancias incorporadas a su patrimonio afectando su derecho a la propiedad, toda vez que los contratos de dólar futuro fueron celebrados y liquidados con anterioridad a la sanción de la ley” – ver pag. 6 del memorial-.



Asimismo, se agravia de la ausencia de análisis en el sucinto decisorio de grado, respecto de la afectación de la seguridad jurídica que conlleva la retroactividad derivada de la aplicación del tributo.

De otro lado, se queja por las conclusiones expresadas en el considerando VI en relación al exceso reglamentario en el que ha incurrido la demandada al dictar la Resolución 4078/17.

Al respecto, afirma que, de conformidad con la norma y el sistema propio de los contratos de dólar futuro, las utilidades gravadas son aquellas ganancias que se hayan obtenido cada vez que la diferencia de precio fue positiva durante el año 2016, y no aquellas ganancias obtenidas durante toda la vigencia del contrato como se deriva de lo dispuesto por la AFIP en la RG 4078/17. Esta modificación, alega la recurrente, incide directamente en la determinación de la base imponible, teniendo como resultado un aumento considerable del monto a tributar, pues abarca otras ganancias que no surgen de la letra ni el espíritu de la norma reglamentada, hecho que ha perdido de vista el sentenciante.

A lo que añade que, en los contratos de dólar futuro, las utilidades no se generan al vencimiento o cancelación anticipada del contrato, sino que se obtienen durante toda su operatoria cada vez que existen diferencias positivas. Por lo tanto, si la ley determinó que las utilidades gravadas son las obtenidas durante el año fiscal 2016, no es posible alterar el alcance de la base imponible por vía de reglamentación con el objeto de gravar la totalidad de la operatoria.

En consecuencia, peticiona que se admitan los agravios y se revoque la sentenciar recurrida. Por último, mantiene la reserva del caso federal.

IV.- Que, a su turno la parte demandada [expresa agravios](#) contra la distribución de las costas dispuesta en la sentencia en crisis.

Sostiene que los accesorios deben ser impuestos a su contraria, en orden al resultado del proceso y, mantiene la reserva del caso federal.

V.- Que, las partes contestaron recíprocamente sus agravios, la demandada el [13/6/2024](#) y la actora el [14/6/2024](#).

Asimismo, en su oportunidad emitió su [dictamen](#) el Sr. Fiscal General.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

Opinó el magistrado que el escrito recursivo de la actora, no satisface los extremos que establece el art 265 del CPCCN, y por ello propicia que se declare desierta a la apelación.

VI.- Que, de la compulsa de las actuaciones surge que, CASAMA S.A. promovió la presente [acción declarativa de certeza](#), con el objeto de que cese el estado de incertidumbre con respecto a su situación frente al Impuesto Extraordinario a las Operaciones Financieras Especulativas (dólar futuro) creado por la Ley N° 27.346, por entender que afecta tanto su derecho de propiedad como los principios de razonabilidad e irretroactividad de la ley.

En sustento de su pretensión, sostuvo que, la normativa cuya inconstitucionalidad cuestiona vulnera los siguientes principios y derechos en su carácter de contribuyente: - Derecho de Propiedad (art. 17 CN y 21 del Pacto de San José de Costa Rica), toda vez que vulnera en forma retroactiva la propiedad del contribuyente. - Doble Imposición y Principio de Capacidad Contributiva (art. 17 CN), toda vez que se grava una circunstancia fáctica ya prevista en el IG y con la misma base sujeta a imposición. - Violación del art 18 CN, a través de la Resolución 4078/17 la AFIP altera y modifica sustancialmente el texto de la Ley 23.748. - Irretroactividad de la ley tributaria (art. 18 CN), toda vez que la ley fue sancionada una vez acaecido el hecho imponible.

Afirmó que, la afectación del orden público surge claramente de las previsiones de los arts. 18, 28, 33 y conc. de la Constitución Nacional.

Y señaló que la cuestión atañe a los boletos de Compra Venta de Dólar Futuro Nros. 585, 586, 587, 2134, 2141, 3026, 3034, 3044, 6561, 6790, 7516, 7517, 7586, 7591, 7592, 8006, 8710, 19824, 16002 20198, 24402, 24532, 26431, 27149, 33939, 34281, 41153, 878, 1205, 2812, 4338, 4456, 4540, 5060, 5268, 6610, 6952 y 11630 concertados por el contribuyente CASAMA SA.

Fecha de firma: 02/08/2024

Firmado por: JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLAUDIA CAPUTI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE CAMARA



#30082516#420429965#20240801173340621

VII.- Que, cuadra advertir que la procedencia formal de la vía intentada ha sido admitida en la instancia previa y la cuestión se encuentra consentida; por manera que, no corresponde que este Tribunal se expida sobre el punto.

Ello sentando, teniendo en cuenta la reseña efectuada y en orden a responder los agravios expresados por la recurrente, cabe recordar que, la doble imposición no importa por sí misma agravio constitucional (cfr. CSJN, *Fallos*: 249:657 y 327:1729, entre otros); no obstante, puede pasar a serlo si la imposición –sea única, doble o múltiple– vulnera los derechos constitucionales del sujeto alcanzado por el tributo. En esta temática, existen varios resortes que permiten llevar a cabo el análisis técnico que conduce a determinar si, efectivamente, hay agravio constitucional.

Es que, la lesión de tal tipo de derecho y/o principio tributario no ha de derivar únicamente del texto abstracto de la norma que crea o configura el impuesto, sino que debe abarcar necesariamente a la situación individual del sujeto obligado a su ingreso, con énfasis en la relación racional estimada entre el valor del bien gravado –en el caso, las utilidades obtenidas de los contratos de futuro– y el monto resultante del gravamen.

Siguiendo este orden de ideas, cabe resaltar que, en el [informe pericial](#) obrante en autos se ha señalado que, “[e]l importe del impuesto establecido por la ley 27346 es de \$366.052,50 y surge de aplicar la alícuota de dicho impuesto (15%) sobre los resultados positivos obtenidos por la actora en las operaciones de compra-venta de dólar futuro de \$2.440.350” – ver punto 2, pag. 2-.

En tales condiciones, y por no haberse probado de qué manera el Impuesto Extraordinario a las Operaciones Financieras Especulativas –“dólar futuro”–, que se debió liquidar una sola vez, y que, según surge de la pericia mencioanda, alcanzaría la suma de \$366.052,50 habría afectado los derechos constitucionales alegados por la actora, la apelación intentada no puede ser admitida.

Sobre el punto, y en sentido contrario al invocado por la recurrente, debe destacarse que, el examen de la validez constitucional de la normativa impugnada en autos no puede efectuarse en abstracto, por manera que, resulta de suma





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

relevancia evaluar la capacidad contributiva de aquel que invoca la confiscatoriedad que se sigue de la doble imposición cuestionada en la causa.

En este sentido, se ha pronunciado la Sala III de esta Cámara, en oportunidad de resolver la causa N° 40998/2017/CA2, “Graetz, Roberto Guillermo c/ EN-AFIP s/proceso de conocimiento”, sentencia del [5/7/2022](#), oportunidad en la que el Tribunal mencionado recordó lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia en los autos “Gómez Alzaga, Martín Bosco c/Buenos Aires, Provincia de y otro s/inconstitucionalidad”, del 21/12/99:

“Es que, también se ha dicho, ‘la presunta conformidad de las leyes nacionales o provinciales con las normas constitucionales, que es el principio cardinal de la división, limitación y coordinación de los poderes en nuestro régimen institucional, no debe ceder –por transgresión a ese principio y a esas normas– sino ante una prueba contraria tan clara y precisa como sea posible (énfasis agregado) y particularmente cuando se trata de impuestos creados por el Poder Legislativo en virtud de sus facultades no discutidas, cabe tener presente que el exceso alegado como violación de la propiedad debe resultar no de una mera estimación personal, aunque ella emane de peritos ilustrados y rectos, ni de circunstancias puramente accidentales y eventuales, sino de una relación racional estimada entre el valor del bien gravado y el monto de ese gravamen, al margen de accidentes transitorios y circunstanciales sobre la producción y el aprovechamiento de aquél’ (Fallos: 207:238)” (Considerando 2º).

A lo que añadió el más Alto Tribunal que: *“Es oportuno recordar también que ‘si bien la inconstitucionalidad de los impuestos por su monto procedería cuando aniquilasen la propiedad o su renta en su sustancia, el control de constitucionalidad en el punto, aunque debe preservar el derecho de propiedad en el sentido lato que le ha adjudicado esta Corte, encuentra fundamento en la*



relación en que tal derecho –cuya función social se ha de tener presente– se halla con la medida de la obligación de contribuir a las necesidades comunes que puede imponerse a sus titulares por el hecho de serlo. El límite admisible de la carga fiscal no es absoluto sino variable en el tiempo y en las circunstancias y sólo encuentra óbice en los que una tradicional jurisprudencia del Tribunal ha fijado’ (Fallos: 314:1293 y sus citas)”. “Debe señalarse, por último, que se ha requerido ‘una prueba concluyente a cargo del actor’ (énfasis agregado) acerca de la evidencia de la confiscatoriedad alegada (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293)” (Considerando 3º).

Como corolario de lo hasta aquí expuesto, cabe concluir que en el caso no ha demostrado la parte actora, el gravamen constitucional invocado como fundamento de su pretensión impugnatoria y que postula la confiscatoriedad derivada de la doble imposición tributaria, ello ante la ausencia de elementos probatorios que permitan determinar el concreto impacto que respecto de su patrimonio produce el pago de la suma liquidada en concepto del impuesto extraordinario cuestionado en autos sumado al pago del impuesto a las ganancias, todo ello con relación al ejercicio 2016.

VIII.- Que, en otro orden y siguiendo con el examen del planteo recursivo, cabe señalar que la ley 27.346, publicada en el Boletín Oficial el 27/12/16, dispuso en su artículo 1º que el Impuesto Extraordinario a las Operaciones Financieras Especulativas –“dólar futuro”– sería aplicable por única vez a las personas jurídicas, humanas y sucesiones indivisas que hubieran obtenido utilidades por operaciones de compra y venta de contratos de futuros, destacando que alcanzaría a las utilidades obtenidas por las personas humanas en el año fiscal 2016 (inc. b). Asimismo, estableció la norma que la liquidación del gravamen se debía realizar de manera complementaria con la declaración jurada del impuesto a las ganancias (art. 3º).

Esa ley entró en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y el Título III, Capítulo III –que es el involucrado en el caso–, surtió efectos, para las personas humanas, respecto de las utilidades obtenidas en el año fiscal 2016.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

Por su parte, la RG 4078-E estableció que las utilidades alcanzadas por las personas humanas serían las obtenidas en el año fiscal 2016, considerándose como tales las percibidas al vencimiento del contrato respectivo o con su cancelación anticipada, producidos durante el referido año (art. 3° inc. b). Además, que la presentación de la declaración jurada y, en su caso, el ingreso del impuesto resultante se efectuarán hasta las fechas fijadas para la presentación y pago de la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal respecto del cual se deba liquidar el impuesto (art. 5°).

Se sigue de lo expuesto que, para el caso de las personas humanas y sucesiones indivisas los contratos que vencieran –o que se cancelaran anticipadamente– en el transcurso del año fiscal 2016, y que arrojaran utilidades, correspondería liquidar el impuesto, declararlo e ingresar la obligación tributaria.

A esa altura, cabe señalar que el Tribunal comparte el criterio expresado en la resolución apelada y que coincide con el expuesto por la Sala III de esta Excma. Cámara de Apelaciones en la causa N° 40998/2017/CA2, “Graetz, Roberto Guillermo c/ EN-AFIP s/proceso de conocimiento”, sentencia antes citada del [5/7/2022](#), de lo que se sigue que, independientemente de la duración y de los resultados parciales que el contrato fuera arrojando, a los fines del impuesto en estudio lo que interesa es “el resultado” –utilidades– que se genere a su vencimiento –o cancelación anticipada–, en la medida que ello tenga lugar entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016, para las personas humanas y sucesiones indivisas.

Ello es así pues, si bien los contratos de futuro se liquidan diariamente, en la medida en que varíe la cotización del activo subyacente, el resultado final se obtendrá al momento del vencimiento del contrato o de su cancelación



anticipada, tiempo en el cual se compensarán los resultados positivos y negativos y se conocerá si hubo utilidades para alguno de los sujetos contratantes.

Entonces, y en línea con lo dispuesto en el artículo 24 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 2019), el hecho imponible, para este tipo de sujetos, se perfeccionó el 31/12/16. Pues bien, siendo ello así, la entrada en vigencia de la ley 27.346 –el 27/12/16–, fue anterior al perfeccionamiento del hecho imponible en su aspecto temporal, con lo cual no se lesionó el principio constitucional ni legal señalado por la actora.

IX.- Que, las consideraciones que anteceden sellan la suerte del último agravio expresado por la actora en relación al exceso reglamentario en el que se habría incurrido al dictar la Resolución 4078/17.

Ello es así pues, conforme a lo establecido por la ley, más allá de la duración de cada contrato y de sus liquidaciones diarias, lo relevante es “su resultado”, que se produce al vencer el contrato o al cancelarse anticipadamente.

Sobre el punto, y como ha señalado el Sr. Fiscal General en su dictamen, la recurrente, insiste en proponer una interpretación del término “utilidades devengadas” contenido en la ley que no surge de su literalidad, ni de una exégesis razonable. Por el contrario, la RG AFIP N° 4078/17 al disponer que, en el caso de las personas jurídicas, se encuentran alcanzadas las utilidades “devengadas en el ejercicio fiscal en curso al 27 de diciembre de 2016”, resulta consistente con la ley del Impuesto a las Ganancias que establece que esos contribuyentes tributan según el régimen de lo devengado. Ello así, la resolución detalla que “[a] tales efectos, el devengamiento del resultado se produce al momento del perfeccionamiento del contrato de futuro que las origina, es decir al vencimiento del mismo o su cancelación anticipada” .

En consecuencia de todo lo expuesto, resulta que el recurso de apelación interpuesto por la actora no puede ser admitido.

X.- Que, resta tratar a los agravios de la demandada con respecto al modo en que fueron distribuidas las costas en la sentencia recurrida.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

Sobre el punto, corresponde en primer lugar señalar que se ha omitido fundar de modo adecuado y suficiente la decisión relativa a repartir los accesorios en el orden causado.

Ello así, cabe señalar que, como principio, la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiese solicitado (art. 68, primer párrafo, CPCCN). Su fundamento radica en el hecho objetivo de la derrota y en la directiva según la cual se debe impedir, en cuanto sea posible, que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierta en daño de quien se ve constreñido a accionar o defenderse en juicio para pedir justicia (conf. Palacio, Lino E., “Derecho Procesal Civil”, Tomo III, pág. 366; Fassi-Yañez, “Código Procesal Civil y Comercial”, Tomo I, pág. 68).

Es cierto que, conforme al segundo párrafo del citado precepto, el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.

A lo que cabe añadir, si bien la norma otorga al juez un margen de arbitrio, debe admitirse la eximición de costas únicamente sobre la base de circunstancias objetivas y muy fundadas, ya que de acordarse con laxitud, la vencida resultaría ser en rigor una parcial vencedora, al imponer al triunfante el sacrificio patrimonial constituido por el costo de la defensa de quien se vio obligado a litigar (conf. Fenochietto–Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Buenos Aires, 2º edición, Tomo I, Astrea, 1993, página 279).

Es que al decidir cómo distribuir las costas, no puede perderse de vista que el triunfo en el tema central alrededor del cual giró la controversia debe reflejarse



en la imposición de las costas, pues no se trata de castigar al perdedor sino de resarcir a la contraria por las erogaciones en que se la obligó a incurrir (*Fallos*: 322:1888; esta Sala, “Tello Néstor Oscar c/ Armada Argentina s/ Personal militar y civil de las FFAA y de seg.”, causa n° 16.905/96, 26/05/11).

Siendo ello así, el apartamiento del principio objetivo de la derrota que rige la asignación de las costas es excepcional y de carácter restrictivo y debe asentarse en sólidas y objetivas razones. La invocación de que se trata de una cuestión novedosa o la sola convicción o creencia subjetiva del litigante de la razón probable para demandar no es, por sí misma, suficiente para eximir del pago de las costas al perdedor, pues es indudable que todo aquél que somete una cuestión a los tribunales de justicia, cree tener razón, más ello no lo exime del pago de los gastos del contrario si el resultado del juicio no le es favorable (esta Sala, “Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/ EN – AFIP – Dto. 863/98 s/ Proceso de conocimiento”, causa n° 127.854/02, del 15/03/12; “Puentes del Litoral SA (TF 26.823-I) c/ DGI”, causa n° 141/12, del 24/04/12; “Cervantes SA c/ EN – M° del Interior s/ Daños y perjuicios”, causa n° 41.031/04, del 22/03/12; Sala I, “Santiago, Manuel Jorge c/ Ministerio de Relaciones Ext. y Culto – Estado Nacional s/ Empleo público”, causa n° 1.309/98, del 13/04/10).

Con base en las pautas expuestas y conforme al resultado del proceso, corresponde admitir el recurso de apelación interpuesto por la demandada, y revocar el punto 3°) de la parte resolutive de la sentencia apelada.

Asimismo, y siendo que no existen razones que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia se imponen también a la vencida.

XI.- Que, por último previo a tratar el recurso de apelación interpuesto por el perito contra la regulación de sus emolumentos, deberán regularse los honorarios correspondientes a la representación letrada de la demandada en atención al modo en que se imponen las costas en el considerando que antecede, y ello a fin de evitar un dispendio jurisdiccional. Oportunamente elévense.

Por todo lo expuesto, y habiendo dictaminado el Sr. Fiscal General, el Tribunal RESUELVE: 1°) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia en cuanto desestimó la acción declarativa promovida por aquélla; 2º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada y revocar el punto 3º de la parte resolutive de la sentencia apelada; 3º) Imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida (art. 68 del CPCCN), y 4º) Ordenar que se regulen los honorarios de la representación legal de la demandada previo a tratar el recurso de apelación interpuesto por el experto.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA

MARÍA CLAUDIA CAPUTI

LUIS M. MÁRQUEZ

Fecha de firma: 02/08/2024

Firmado por: JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLAUDIA CAPUTI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE CAMARA



#30082516#420429965#20240801173340621